18 de agosto del 2021

CNS-1679/08

CNS-1680/07

CNS-1681/09

Señora

María del Rocío Aguilar Montoya, superintendente

***Superintendencia General de Entidades Financieras***

Estimada señora:

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en los artículos 8, 7 y 9, de las actas de las sesiones 1679-2021, 1680-2021 y 1681-2021, celebradas, la primera el 9 y las siguientes el 16 de agosto del 2021.

**considerando que:**

I. El inciso 2) del artículo 361 *Ley General de la Administración Pública* establece que se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición, la oportunidad de exponer su parecer.

II. Se elaboró el proyecto modificación integral al *Reglamento para la calificación de los deudores*, Acuerdo SUGEF 1-05, y en cumplimiento del *Procedimiento para la Tramitación ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Costarricense de Proyectos de Emisión o Reforma de Reglamentos del Sistema Financiero*, éste debe ser sometido a consulta de las entidades supervisadas, cámaras y gremios y a los grupos y conglomerados financieros.

**dispuso en firme:**

remitir en consulta, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2, artículo 361, de la *Ley General de la Administración Pública*, al Banco Central de Costa Rica, bancos comerciales del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, grupos y conglomerados financieros, bancos privados, empresas financieras no bancarias, Banco Hipotecario de la Vivienda, Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande, Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FEDEAC, R.L., Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOOPSE, R.L., organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, entidades autorizadas del sistema financiero nacional para la vivienda, Asociación Bancaria Costarricense, Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Federación de Mutuales de Ahorro y Préstamo de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros (INS), entidades aseguradoras, Asociación de Aseguradoras Privadas, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), y Ministerio de Hacienda, la propuesta de***Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias*** que se inserta a continuación, en el entendido de que en un plazo máximo de quince días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente del recibo de la respectiva comunicación, deberán enviar al Despacho de la Superintendente General de Entidades Financieras, sus comentarios y observaciones mediante el canal oficial dispuesto en el Sitio Web de la SUGEF llamado **“Formularios para remitir observaciones de normativa en consulta”**, ubicado en la siguiente dirección electrónica:

<https://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_en_consulta.aspx>

Sin detrimento de lo anterior, las entidades consultadas pueden presentar de manera consolidada sus observaciones y comentarios a través de los gremios y cámaras que les representan. Asimismo, el correo electrónico normativaenconsulta@sugef.fi.cr será utilizado **únicamente** como mecanismo de notificación sobre la completitud de dicho formulario.

**PROYECTO DE ACUERDO**

**“Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias**

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,

**considerando que:**

**Consideraciones de orden legal y reglamentario**

1. De conformidad con lo estipulado en el artículo 171 inciso b) de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, le corresponde al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la Ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Superintendencia General de Seguros (SUGEVAL), en este último caso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653.

2. El inciso c) del artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, establece como parte de las funciones del Superintendente General de Entidades Financieras proponer al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para su aprobación, las normas que estime necesarias para el desarrollo de las labores de supervisión y fiscalización.

3. Los incisos g) y p) del artículo 42 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983, establecen el deber de los entes autorizados de suministrar la información general y financiera requerida por la Superintendencia de Pensiones, dentro de los plazos y condiciones que al efecto se dispongan.

4. De conformidad con el inciso f) del artículo 38, de la Ley sobre el Régimen Privado de Pensiones Complementarias, Ley 7523, le corresponde al Superintendente de Pensiones adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las funciones de supervisión que legalmente ejerce la Superintendencia de Pensiones.

5. El inciso r) del artículo 38 de la Ley 7523, establece, como una de las atribuciones del Superintendente de Pensiones, dictar normas específicas sobre el contenido, la forma y la periodicidad con que las entidades supervisadas deben proporcionar a la Superintendencia de Pensiones información sobre su situación jurídica, económica y financiera, sobre las características y los costos de sus servicios, las operaciones activas y pasivas y cualquier otra información que considere de importancia, con el fin de que sea suficiente y confiable sobre la situación de las entidades supervisadas.

6. De conformidad con el inciso f) del artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, son obligaciones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras acatar las normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión o la Superintendencia General de Seguros para la constitución de las provisiones técnicas y reservas, la estimación de riesgos, la custodia y valoración de activos y pasivos.

7. La Ley 12 del Instituto Nacional de Seguros en su artículo 1, autoriza al Instituto a realizar actividades de otorgamiento de créditos, siendo la única entidad aseguradora autorizada a realizar este tipo de actividades, por lo tanto, ninguna otra entidad aseguradora, podrá emitir créditos al amparo de esta normativa. Con el propósito de ejercer una supervisión efectiva sobre este tipo de actividad y aplicar un tratamiento prudencial consistente a riesgos de similar naturaleza, es apropiado que las disposiciones que se emitan en el presente Reglamento también sean de aplicación para las entidades de seguros autorizadas a realizar actividades crediticias.

8. Mediante artículo 7, del acta de la sesión 540-2005, celebrada el 24 de noviembre de 2005, el CONASSIF aprobó el Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05, mediante el cual se estableció el marco metodológico para la clasificación de deudores y la constitución de las estimaciones correspondientes. Dicho Reglamento alcanza a las entidades supervisadas por SUGEF.

9. De conformidad con los artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 1442-2018 y 1443-2018, ambas celebradas el 11 de setiembre de 2018 se aprobó el Reglamento de Información Financiera, Acuerdo 30-18, (en adelante: RIF), vigente a partir del 01 de enero de 2020, y publicado en el Alcance 188 al Diario Oficial La Gaceta 196 del 24 de octubre del 2018. El RIF es un reglamento con alcance a todas las entidades supervisadas por las cuatro superintendencias financieras del país. Con la aprobación del RIF se actualizó la base contable regulatoria con el propósito de avanzar hacia la adopción en el Sistema Financiero Nacional (SFN) de las “Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF) con sus textos más recientes, emitidos por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), lo anterior para favorecer la comparabilidad y la lectura de la información financiera tanto de usuarios nacionales como extranjeros. En el Considerando XXXIV de dicho Reglamento se dispuso que hasta que no se implemente en Costa Rica la NIIF 9 Instrumentos Financieros para la cartera de crédito de los intermediarios financieros, las disposiciones establecidas en el “Reglamento para la calificación de deudores” Acuerdo SUGEF 1-05, se mantendrán vigentes y las entidades continuarán calculando dichas estimaciones según la metodología dispuesta en dicho Reglamento. Así mismo, mediante Transitorio III del RIF se dispuso que para la aplicación de la NIIF 9, específicamente para la medición de las pérdidas crediticias esperadas se continuará con la regulación prudencial emitida por el CONASSIF para la cartera de créditos y créditos contingentes concedidos, hasta que esta norma se modifique.

10. En materia de revelación de información financiera, con la entrada en vigencia del RIF el 1 de enero de 2020 quedó adoptada la NIIF 7 Instrumentos Financieros. Este estándar establece que las entidades deben revelar en sus estados financieros información que permita a los usuarios evaluar: (a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. Los principios de revelación contenidos en esta NIIF complementan a los de reconocimiento, medición y presentación de los activos y pasivos financieros establecidos en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y la NIIF 9 Instrumentos Financieros.

11. Mediante el artículo 12, del acta de la sesión 1251-2016, celebrada el 10 de mayo del 2016, el CONASSIF aprobó el Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo, Acuerdo SUGEF 15-16. Este Reglamento es de aplicación exclusiva a las operaciones de crédito avaladas o financiadas con recursos del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD) y sigue parámetros y alcances específicos definidos en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634 del 23 de abril de 2008 y Ley 9274 del 12 de noviembre del 2014. El Acuerdo SUGEF 15-16 no se modifica con la reforma reglamentaria que se propone.

12. Mediante artículo 6 del acta de la sesión 1258-2016, celebrada el 7 de junio del 2016, el CONASSIF aprobó el Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contracíclicas, Acuerdo SUGEF 19-16. Las estimaciones contracíclicas se consideran genéricas, es decir, no están relacionadas a un riesgo específico, sino que se asocian a riesgos que aún no se han manifestado. En este sentido, son de carácter prudencial, y no corresponden a un ajuste al valor de un activo financiero por riesgos crediticios manifiestos o esperados. El estándar NIIF no admite que estas estimaciones sean tratadas como gasto, y consecuentemente este tratamiento es una brecha con dicho estándar.

13. Se considera necesario contar con herramientas prudenciales contracíclicas, que contribuyan a preservar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del Sistema Financiero en periodos de contracción económica. De previo a plantear el cambio hacia requerimientos contracíclicos basados en capital y no en estimaciones, resulta necesario contar con un periodo de observación de la nueva dinámica de estimaciones calculadas a partir de esta propuesta. Además, frente a la coyuntura actual, prudencialmente conviene preservar los resguardos constituidos mediante estimaciones contracíclicas, y aplicarlos conforme las reglas de acumulación y desacumulación establecidas en la regulación. Por esta razón, el Acuerdo SUGEF 19-16 no se modifica con la reforma reglamentaria que se propone.

14. En el caso de entidades de seguros, el IASB, desde la emisión de la primera versión de la NIIF 17 en 2017, dispuso una exención para la entrada en vigencia de la NIIF 9, hasta la entrada en vigor de la NIIF 17 “Contrato de Seguros” a partir de 1° de enero de 2023. Lo anterior en razón de las interrelaciones entre ambas normas en aspectos como la definición de modelo de negocio, justificó que su aplicación deba hacerse de forma conjunta. En este sentido, conforme a la decisión confirmada por IASB en junio del presente año, relacionada con la fecha de vigencia de entrada de la norma, y en línea con lo dispuesto en el Reglamento sobre Información Financiera, las entidades aseguradoras podrán implementar, conjuntamente, NIIF 9 y NIIF 17, a partir de 1° de enero de 2023.

15. La presente regulación hace uso intensivo de la información crediticia que la SUGEF mantiene en virtud del ejercicio de sus labores de supervisión preventiva. Dicha información incluye, entre otros aspectos, el estado del deudor en la atención de sus obligaciones en el Centro de Información Crediticia (CIC), cuyos alcances se encuentran regulados mediante artículo 133 de la Ley 7558, así como una amplia diversidad de información relacionada con las características de los deudores, las operaciones, sus garantías y en general sobre el historial de las carteras crediticias. Por el contrario, la actividad crediticia en entidades supervisadas por las Superintendencias de Pensiones y Seguros no representa una actividad sustantiva, y consecuentemente la infraestructura de datos no cuenta con el alcance y profundidad de las bases de datos de la SUGEF. Aunado a ello, las restricciones para el acceso directo a la información del CIC para los supervisados del sector de seguros y pensiones, hace que estas entidades no puedan contar con todas las variables e información requerida para aplicar la metodología que se desarrolla en la presente normativa, y consecuentemente se hace necesario que el Superintendente General de Seguros o Superintendente de Pensiones, puedan realizar las adaptaciones que estimen pertinente para extender la metodología aquí dispuesta a sus supervisados. El mecanismo práctico para establecer estas adaptaciones es mediante Lineamientos Generales emitidos por la respectiva superintendencia.

16. En el caso de sujetos supervisados por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, los Puestos de Bolsa tienen como principal objetivo la intermediación bursátil y están facultados para otorgar créditos a sus clientes (inversionistas), siempre que estén directamente relacionados con la compra y venta de valores (Artículo 56, Ley 7732), por lo general se trata de operaciones que se liquidan en pocos días dentro del proceso de compensación y liquidación de valores. Además, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, tienen como único objetivo la administración de fondos de inversión (Artículo 65, Ley 7732). Lo mismo se presenta con otros regulados como las Bolsas de Valores cuyo principal objetivo es facilitar las transacciones con valores. De manera que, la actividad crediticia no forma parte de la operativa de estas entidades.

17. En relación con las Sociedades Titularizadoras y los vehículos de propósito especial creados mediante la Ley para el Desarrollo de un Mercado Secundario de Hipotecas con el fin de Aumentar las Posibilidades de las Familias Costarricenses de Acceder a una Vivienda Propia, y Fortalecimiento del Crédito Indexado a la Inflación (Unidades de Desarrollo-UD), Ley 8507, con el objetivo de estructurar valores para otorgar financiamiento, a la fecha los participantes del mercado no han mostrado un interés relevante en el uso de estas figuras y no se cuenta con Sociedades Titularizadoras autorizadas. Por los elementos anteriores, se encuentra que la propuesta normativa expuesta en este documento no tendría como alcance a entidades supervisadas por la SUGEVAL.

**Consideraciones técnicas sobre el marco de regulación**

18. La metodología para la determinación de las estimaciones por riesgo de crédito establecida en el *Reglamento para la calificación de deudores*, Acuerdo SUGEF 1-05, vigente, requiere mejoras para adecuarse a enfoques modernos de medición de estimaciones crediticias, principalmente recogidos en estándares prudenciales emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Dichas mejoras buscan por un lado reforzar la responsabilidad de la entidad por llevar a cabo una evaluación apropiada de sus riesgos crediticios, y consecuentemente de crear los resguardos contables necesarios mediante estimaciones y capital que fortalezcan su solvencia, para lo cual se espera que las entidades avancen hacia enfoques prospectivos, a la medida de su negocio crediticio y sustentables, para la evaluación y cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. Por otro lado, se busca contar con una metodología estándar establecida en la regulación más sensible al riesgo y mejor calibrada en sus parámetros de riesgo relevantes. En el tiempo, se espera que ambos esfuerzos converjan hacia enfoques metodológicos más robustos.

19. Desde el 2004, dentro de los enfoques de cálculo de capital por riesgo de crédito bajo metodologías internas, el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancario incluyó explícitamente el uso de los tres componentes básicos para el cálculo de las pérdidas esperadas: i) la probabilidad de incumplimiento (PD por las siglas en inglés de “Probability of Default”), ii) la pérdida en caso de incumplimiento (LGD por las siglas en inglés de “Loss Given Default”), y iii) la exposición en caso de incumplimiento (EAD por las siglas en inglés de “Exposure at Default”). La pérdida crediticia esperada (PCE) se define generalmente como el producto de esos tres componentes (PCE = PD x LGD x EAD).

20. En julio 2014 la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board o IASB por sus siglas en inglés) emitió, con vigencia efectiva a partir de enero de 2018, el estándar Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), Instrumentos Financieros, mediante la cual introdujo el enfoque de pérdidas crediticias esperadas para el reconocimiento del deterioro de los instrumentos financieros. Con esta modificación, la práctica contable se acercó a la prudencial, emitida por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), que ya desde hace varios años había incorporado en su instrumental el concepto de pérdida esperada, calculada a partir de la estimación de probabilidades de incumplimiento y otras métricas.

21. Si bien existen discrepancias metodológicas en el cálculo de pérdidas crediticias esperadas según el Comité de Basilea y NIIF 9, mediante el documento “Orientaciones sobre riesgo de crédito y contabilidad de pérdidas crediticias esperadas” emitido por el CSBB en 2015 se establecieron orientaciones para la contabilidad de pérdidas crediticias esperadas (PCE) que no contravienen las NIIF; en el documento se reconoce que los entes supervisados pueden tener modelos para el cálculo de pérdidas esperadas por riesgo de crédito y pérdidas no esperadas con fines de capital regulador, dichos modelos pueden utilizarse como punto de partida para estimar las PCE con fines contables, aunque pueden no ser utilizables directamente para calcular las pérdidas crediticias esperadas debido a diferencias entre los objetivos y los datos utilizados para cada uno de estos fines.

22. NIIF 9 hace referencia al uso de probabilidades de incumplimiento para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas, calculadas tanto para un periodo de 12 meses como por el periodo de vida de un crédito (“lifetime PD”). En el primer caso, se aplican para el cálculo de PCE en la Etapa 1 y en el segundo caso, se aplican en las Etapas 2 y 3. La NIIF 9 no describe cómo se debe llevar a cabo el cálculo de esta probabilidad. El Comité de Basilea únicamente aplica en sus mediciones probabilidades de incumplimiento para 12 meses.

23. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que la transparencia garantiza la revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluidos la situación financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa, además, la OCDE detalla que la información deberá ser elaborada y divulgada con arreglo a normas de alta calidad en materia de contabilidad y revelación de información financiera y no financiera; en ese sentido, es importante indicar que uno de los puntos que el IASB busca desarrollar, promover y proveer, dentro del conjunto único de normas de información financiera para la preparación de los estados financieros, es la transparencia.

24. La regulación propuesta es un avance respecto a la regulación vigente en al menos los siguientes aspectos:

i. Reconoce la existencia de diferentes líneas de negocio crediticio, de manera que la medición de las estimaciones crediticias sea más sensible al riesgo inherente de cada línea relevante.

ii. Establece segmentos de acuerdo con la tipología del crédito que permitan distinguir entre un enfoque por operación, para carteras al detalle que puedan tratarse como grupos homogéneos de riesgo, y un enfoque por deudor, para carteras empresariales y corporativas.

iii. Mejora el cálculo de estimaciones para cada línea relevante utilizando elementos prospectivos consistentes con enfoques de pérdidas crediticias esperadas. Estos enfoques identifican tres componentes esenciales de las pérdidas crediticias:

a. la probabilidad de incumplimiento,

b. la severidad de pérdida en caso de incumplimiento, y

c. la exposición en caso de incumplimiento.

 En todos los casos se utiliza información histórica relevante de cada línea de negocio para calibrar los respectivos factores de riesgo. En el caso particular de la probabilidad de incumplimiento, la práctica usual contempla el cálculo de tasas de incumplimiento históricas y su posterior transformación a probabilidades de incumplimiento, mediante una función de pronóstico que incluya escenarios para las condiciones relevantes del entorno en un horizonte de 12 meses. Mediante este pronóstico se le imprime a la métrica de incumplimiento su valor prospectivo.

 Este Reglamento establece una metodología estándar desarrollada por las autoridades de regulación. Esto implica que corresponde a dichas autoridades el diseño del modelo y el cálculo los parámetros que las entidades utilizarán para calcular las estimaciones crediticias regulatorias. Posteriormente, los resultados de aplicar el modelo se contrastan contra los resultados reales reportados por las entidades supervisadas. Como se indicó, el cálculo de probabilidades de incumplimiento requiere la definición de escenarios para proyectar las tasas de incumplimiento, la elección del modelo de pronóstico y su calibración, y posteriormente su validación. Estos aspectos incorporan un alto grado de discrecionalidad que no conviene para fines prácticos que sea asumido directamente por el supervisor. Por esta razón, el Reglamento dispone un conjunto de tasas de default para cada segmento crediticio y en sentido estricto, no estaría llegando al cálculo de pérdidas crediticias esperadas. Sin embargo, el Reglamento admite que las entidades calculen las probabilidades de incumplimiento para los segmentos regulatorios, las cuales podrán utilizarse en el cálculo interno de sus estimaciones crediticias.

iv. Ajusta el valor de mitigación de créditos, transformando el “porcentaje de aceptación” incluido en la regulación vigente, por un factor de ajuste calculado con criterios de severidad de pérdida en caso de incumplimiento (uno menos porcentaje de recuperación), asimismo, revisa integralmente las garantías y colaterales admisibles para acotar su uso en la metodología estándar a aquellos que han demostrado efectividad de recuperación bajo escenarios de estrés.

v. El reglamento segmenta la cartera crediticia en función de las tres etapas identificadas por NIIF 9, pero tal como se indicó anteriormente, se optó por utilizar tasas de incumplimiento en un periodo de 12 meses en las tres etapas. Las entidades supervisadas podrán calcular las correspondientes probabilidades de incumplimiento para 12 meses y para la vida del crédito según lo dispuesto en las NIIF, y complementar el cálculo de las estimaciones regulatorias. Estos tres segmentos se definen en la regulación de la siguiente manera:

a. Etapa 1: Operaciones en Riesgo Normal. Se incluyen las operaciones sin evidencia de incremento significativo de riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial.

b. Etapa 2: Operaciones en Vigilancia Especial. Se incluyen las operaciones que presentan un incremento significativo del riesgo de crédito respecto a la valoración de riesgo realizada en el reconocimiento inicial de la operación, sin llegar a ser operaciones dudosas o fallidas. Para evaluar si existe un incremento significativo de riesgo de crédito la entidad utilizará indicadores cualitativos y cuantitativos (variación relativa de la Probabilidad de Incumplimiento respecto de la estimada en el momento que se originó la operación). Asimismo, se aplicarán los criterios automáticos que definen un deudor con operación especial. En este caso la clasificación a la Etapa 2 se realizará por el importe total del crédito.

c. Etapa 3: Operaciones de Dudosa Recuperación. Se incluyen las operaciones que presentan evidencia objetiva de deterioro, lo cual ocurre cuando se ha presentado un evento de incumplimiento o se considera que existe una alta probabilidad de que este se presente.

**Consideraciones específicas**

**Deudor con Operación Especial**

25. Se ajusta el concepto de Operaciones Especiales tal como está dispuesto en la regulación vigente, para dar lugar al concepto de Deudor con Operación Especial que es aquel que se ubica en la Etapa 2 (Operaciones en Vigilancia Especial); o en la Etapa 3 (Operaciones de dudosa recuperación). La clasificación en estas etapas es consistente con una saludable administración del riesgo, al identificar las operaciones crediticias cuyas condiciones de pago han sido modificadas o que cuentan con condiciones de pago especiales como prórroga, readecuación o refinanciamiento. En la actualidad la regulación hace referencia a las operaciones especiales en términos individuales y en este caso, el impacto de las operaciones será considerado a nivel de deudor. Con lo cual, se le debe mantener la calificación al deudor por un periodo de tiempo prudencial antes de mejorar su calificación con el fin de evaluar el comportamiento de pago del deudor bajo los términos modificados o mantener la calificación del deudor mientras tenga al menos una operación crediticia con condiciones de pago especiales.

**Estimaciones a no generadores**

26. El enfoque adoptado en este reglamento mantiene la estimación adicional requerida para créditos concedidos en moneda extranjera a deudores no generadores de divisas. Su uso se justifica como parte del conjunto de herramientas macroprudenciales de que dispone el regulador para complementar los instrumentos de política cambiaria con el objetivo de disminuir los riesgos para el sistema financiero nacional asociados a la dolarización del sistema financiero. Estas estimaciones representan un alejamiento con la aplicación estricta de las pérdidas crediticias esperadas según NIIF 9, donde se espera que las estimaciones específicas resultantes ya tomen en consideración el riesgo de si la operación de crédito se otorga en moneda local o moneda extranjera a deudores no generadores de divisas.

**Uso de la metodología estándar para el cálculo de estimaciones crediticias**

27. El presente acuerdo establece la metodología estándar de clasificación de deudores y cálculo del monto mínimo de estimaciones crediticias que las entidades deben mantener registrados contablemente al cierre de cada mes. El monto mínimo que la entidad debe mantener registrado**,** al cierre de cada mes representa un piso prudencial por debajo del cual ninguna entidad supervisada puede mantenerse. Adicionalmente, como resultado de los estudios de supervisión sobre la calidad de la cartera crediticia, la Superintendencia puede comunicar a la entidad ajustes que derivan en un incremento del monto mínimo, el cual debe quedar reflejado en los registros contables de la entidad supervisada. El éxito del piso prudencial como una herramienta del supervisor, parte de su adecuada calibración; mediante el equilibrio ya mencionado entre sensibilidad al riesgo, sencillez y comparabilidad.

**Uso de metodologías internas para el cálculo de estimaciones crediticias**

28. Las instituciones financieras pueden utilizar metodologías internas basadas en pérdidas esperadas para el cálculo de estimaciones crediticias; sin embargo, el monto registrado de esas estimaciones no puede ser menor al monto resultante de utilizar el enfoque estándar. De esta forma, el monto mínimo de estimaciones crediticias que las entidades deben mantener registrados contablemente, con contrapartida en la cuenta de resultados, al cierre de cada mes es el que corresponde al resultado de aplicar la metodología de cálculo de estimaciones descrito en el presente reglamento. El monto en exceso a ese mínimo deberá registrarse contablemente utilizando como contrapartida una cuenta contable debidamente individualizada en el patrimonio, hasta que la Superintendencia avale el uso de la metodología interna, en cuyo caso dicho exceso podrá registrarse contra los resultados del ejercicio.

**Garantías**

29. Las garantías reducen la exposición al riesgo de crédito, por lo que es razonable tomar en cuenta su efecto como mitigador del riesgo, en el tanto ellas estén bien constituidas y valoradas. Asimismo, se considera razonable la aceptación de la garantía como mitigador de riesgo aún en las categorías de mayor riesgo, pero ponderando su valor a menos de un cien por ciento. La experiencia con la aplicación del Acuerdo SUGEF 1-05 relativo a las garantías –y el uso de estás para mitigar el riesgo de crédito–sugiere que es conveniente reducir el número de garantías que pueden utilizarse como mitigador en la metodología estándar.

**Categorías de riesgo**

30. Se establecen cinco categorías de riesgo que se alinean con las tres Etapas de la NIIF 9. Las dos primeras categorías corresponden a la Etapa 1 “Operaciones en Riesgo Normal”, la tercera categoría a la Etapa 2 “Operaciones en Vigilancia Especial” y las dos últimas categorías corresponden a la Etapa 3 “Operaciones en Dudosa Recuperación” de la NIIF 9.

**Etapas para la adopción de la NIIF 9 en lo que respecta al cálculo de Pérdidas Crediticias Esperadas para la cartera de crédito**

31. La adaptación de la NIIF 9 para Costa Rica se visualiza en tres fases.

a. Primera Fase: se establece en la regulación una metodología estándar como la metodología del regulador, y que determinará un piso o nivel mínimo admitido por el regulador para el reconocimiento de las estimaciones crediticias. La Regulación incluye un Capítulo correspondiente a metodología internas, las cuales se espera que las entidades vayan desarrollando. Esta fase reconoce que debe existir un periodo de madurez tanto para las entidades como para el regulador en lo que respecta a la adopción y uso de metodologías, estándar o internas, basados en pérdidas esperadas.

b. Segunda Fase: La Superintendencia incentiva el desarrollo y uso de metodologías internas como parte esencial del proceso de gestión de riesgos. Por lo cual, da inicio la valoración de las metodologías internas desarrolladas por las entidades.

 La regulación establece la expectativa del regulador en cuanto a las precondiciones necesarias para la admisión de metodologías internas, a través de una serie de requisitos que deberán cumplir las entidades para contar con el aval de uso de las metodologías internas. Esta fase estará abierta y las entidades podrán ingresar en el momento en que se encuentren preparadas.

 Cuando la entidad haya cumplido el periodo de observación y cuente con el aval de uso por parte de la Superintendencia, podrá pasar a la Tercera Fase.

 Cabe señalar la importancia del periodo de observación, por lo que no se permitirá que las entidades pasen de la Primera Fase a la Tercera Fase.

c. Tercera Fase: se admite el uso de los resultados de metodologías internas para la constitución de las estimaciones por riesgo de crédito, en sustitución del resultado de la metodología estándar. Consecuentemente se elimina el nivel mínimo de estimaciones establecido en la Primera y Segunda Fase, pero siempre se deberá calcular y reportar el resultado de la metodología estándar. Si como resultado de las evaluaciones sobre el uso de las metodologías internas se determina que la entidad incumple con adecuada gestión de éste, ésta deberá regresar a la Segunda Fase, por lo que deberá nuevamente iniciar el período de observación.

32. En virtud de que el presente Reglamento prevé la emisión de lineamientos generales mediante acuerdo del Superintendente General de Entidades Financieras, y dado que resulta necesario su conocimiento para un adecuado análisis, se estima conveniente solicitar al Superintendente que emita los lineamientos generales en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la firmeza del presente acuerdo.

33. La Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley 9635, publicado mediante Alcance 202 al Diario Oficial La Gaceta 225 del 4 de diciembre de 2018, adicionó el inciso v) al artículo 8, Gastos deducibles, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092, de 21 de abril de 1988. Según éste: “v) Tratándose de entidades financieras supervisadas por las superintendencias adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), las sumas para constituir estimaciones, reservas o provisiones autorizadas por los órganos de supervisión o que deban mantener, obligatoriamente, dichas entidades en cumplimiento de las disposiciones emitidas y de conformidad con los límites técnicos establecidos, en ambos casos, por los órganos de supervisión. Dichas reservas serán debidamente individualizadas en los libros y los balances de las entidades. Las superintendencias y el CONASSIF deberán consultar con el Ministerio de Hacienda la regulación que se emita que tenga incidencia tributaria”.

**dispuso:**

aprobar el *Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias*.

**REGLAMENTO SOBRE CÁLCULO DE ESTIMACIONES CREDITICIAS**

**TÍTULO I**

**DISPOCISIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1. Objeto**

Este Reglamento tiene por objeto establecer la metodología para cuantificar el riesgo de crédito de las operaciones crediticias o de los deudores, y constituir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades supervisadas, así como de los grupos y conglomerados financieros.

**Artículo 2. Alcance**

Las disposiciones establecidas en este Reglamento son aplicables a las entidades y empresas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); así como a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) que realizan actividades crediticias.

Sin detrimento de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las empresas y entidades supervisadas por la SUPEN y la SUGESE que realizan actividades crediticias, se habilita a la respectiva Superintendencia para aceptar mediante resolución razonada caso por caso, el uso de metodologías internas por parte de sus supervisados para cuantificar el riesgo de crédito y constituir las estimaciones correspondientes, en sustitución de la metodología estándar a que hace referencia este reglamento. Esta admisión debe aplicarse a la totalidad de la cartera crediticia, y en caso de que el supervisado no cumpla con los requerimientos mínimos para el uso de metodologías internas, deberá aplicarse la metodología estándar establecida en este Reglamento.

En el caso de las empresas integrantes de los grupos y conglomerados financieros, se admite el uso de metodologías internas. En el caso de entidades y empresas integrantes de grupos y conglomerados financieros domiciliadas en el exterior y sujetas a supervisión de la respectiva autoridad de la plaza, se admite el cálculo de estimaciones crediticias de conformidad con las disposiciones emitidas por su respectiva autoridad de supervisión.

Se exceptúa de la aplicación de este Acuerdo, a las operaciones de crédito realizadas por entidades supervisadas por la SUGEF mediante operaciones diferidas de liquidez, en moneda nacional y extranjera y bajo la modalidad no garantizada, efectuadas con el Banco Central de Costa Rica como contraparte directa.

**Artículo 3. Definiciones**

Para los propósitos de este Reglamento se tendrán por aplicables las definiciones establecidas en el marco de regulación vigente, en adición a las siguientes definiciones:

**a. Capacidad de pago:** Situación financiera y capacidad del deudor para generar flujos de efectivo en el giro normal de su negocio o de la remuneración de su trabajo y retribución de su capital, que le permitan atender sus obligaciones financieras en las condiciones pactadas.

**b. Comportamiento de pago histórico:** Antecedentes crediticios del deudor en la atención de sus obligaciones financieras durante los últimos cuatro años, independientemente de si éstas se encuentran vigentes o extintas a la fecha de corte.

**c. Crédito revolutivo:** Operación crediticia que faculta al deudor el uso de fondos hasta un límite preautorizado, en la cual cada pago aumenta la disponibilidad de fondos, tales como líneas de crédito, tarjetas de crédito, sobregiros, y otras operaciones crediticias similares.

**d. Deudor (o codeudor):** Persona que recibe fondos o facilidades crediticias de la entidad en forma directa. Adicionalmente se considerará como tal al descontatario en caso de un contrato de descuento, el cedente en una cesión con recurso, el obligado a pagar un documento en una cesión sin recurso, o la persona a la que la entidad concede un aval o garantía.

**e. Morosidad:** El mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia, contados a partir del primer día de atraso, que presenta el deudor en la atención de sus operaciones crediticias en la entidad a una fecha determinada según las condiciones contractuales de pago.

**f. Deudor con operación especial:** Corresponde a todas las operaciones de un deudor, que hayan sido refinanciadas, readecuadas o prorrogadas.

**g. Operación prorrogada:** Operación crediticia en la que por lo menos un pago total o parcial de principal o intereses ha sido postergado a una fecha futura en relación con las condiciones contractuales vigentes, con el objetivo de evitar su incumplimiento.

**h. Operación readecuada:** Operación crediticia en la que por lo menos una de las condiciones de pago contractuales vigentes ha sido modificada, con el objetivo de evitar su incumplimiento, excepto la modificación por prórroga.

**i. Operación** **refinanciada:** Operación que se pone total o parcialmente al día como consecuencia de una nueva operación crediticia.

**j. Valor ajustado de la garantía:** Es el resultado de multiplicar el último valor de tasación, por el factor de descuento y por el porcentaje de recuperación.

**k. Tasa de incumplimiento (TI):** Número de operaciones de crédito en incumplimiento dividido entre el total de operaciones de crédito, en un horizonte temporal determinado.

**l. Probabilidad de incumplimiento (PD por sus siglas en inglés: Probability of Default):** Es una métrica prospectiva sobre la tasa de incumplimiento esperada para un horizonte de 12 meses, asociada a cada segmento crediticio, considerando para su pronóstico posibles escenarios.

**m. Exposición:** corresponde al volumen de riesgo (monto) expuesto del saldo total adeudado de la operación crediticia.

**n. Exposición dado incumplimiento** **(EAD por sus siglas en inglés: Exposure at Default):** corresponde al volumen de riesgo expuesto en el momento del incumplimiento.

**o. Pérdida dado incumplimiento** **(LGD por sus siglas en inglés: Loss Given Default):** porcentaje final que se pierde en caso de incumplimiento, es decir, el porcentaje no recuperado.

**Artículo 4. Lineamientos Generales**

Mediante acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, el Superintendente debe emitir los Lineamientos Generales necesarios para la aplicación de esta regulación. Estos Lineamientos Generales pueden ser modificados por el Superintendente cuando lo considere conveniente.

**TITULO II**

**METODOLOGÍA ESTÁNDAR**

**CAPÍTULO I.**

**SEGMENTACIÓN**

**Artículo 5. Segmentación de la cartera de créditos**

La cartera de crédito debe clasificarse en los siguientes segmentos:

**a)** Créditos revolutivos de consumo aplicable a personas físicas.

**b)** Créditos para vehículos aplicables a personas físicas y personas jurídicas, cuyo único propósito sea destinarlo a la adquisición del vehículo por la persona física.

**c)** Créditos de consumo regular: Créditos de consumo que no pertenecen a los literales anteriores.

**d)** Créditos para vivienda aplicables a personas físicas y personas jurídicas, cuyo único propósito sea destinarlo a la adquisición de la vivienda por la persona física.

**e)** Empresarial 1: Personas jurídicas y físicas cuyo saldo total adeudado, excluyendo los créditos para vivienda a que se refiere el literal d) anterior, en la entidad financiera durante el último año haya superado los 1,000 millones de colones por lo menos en una oportunidad. Asimismo, se clasifican en este segmento los siguientes:

1. Persona jurídica que pertenece a un grupo de interés económico reportado por la entidad a la SUGEF, cuyos ingresos totales, según la última información disponible en la entidad, superan los 10,000 millones de colones.

2. Entes y órganos que conforman las instituciones del Sector Público, según la “Clasificación

Institucional del Sector Público” publicada por el Ministerio de Hacienda.

3. Entidad supervisada por la SUGEF o alguna Superintendencia adscrita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

4. Vehículo de propósito especial o Fideicomiso.

**f)** Empresarial 2: Personas jurídicas y físicas que no clasificadas en el segmento Empresarial 1 y cuyo saldo total adeudado, excluyendo los créditos para vivienda a que se refiere el literal d) anterior, en la entidad financiera durante el último año haya superado los 500 millones de colones por lo menos en una oportunidad.

**g)** Empresarial 3: Personas jurídicas y físicas que no califican en ningún segmento anterior.

El umbral del saldo total adeudado a que se hace referencia en la definición de Empresarial 1 y Empresarial 2, será ajustado cada 5 años utilizando el Índice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

**CAPÍTULO II**

**CATEGORIAS DE CALIFICACIÓN**

**Artículo 6. Categorías de riesgo**

La entidad debe calificar individualmente en categorías de riesgo, las operaciones crediticias o los deudores, según corresponda su clasificación en alguno de los segmentos definidos en el artículo 5 de este Reglamento, de conformidad con los siguientes enfoques:

a) Deberá aplicarse un enfoque de calificación por operación crediticia, en el caso de los segmentos indicados en los incisos del a) al d), y el inciso g) Empresarial 3, del Artículo 5 de este Reglamento.

b) Deberá aplicarse un enfoque de calificación por deudor, en el caso de los incisos e) Empresarial 1 y f) Empresarial 2 del Artículo 5 de este Reglamento.

Para los efectos de esta calificación bajo la metodología estándar, se establecen cinco categorías de riesgo, las cuales se identifican con 1, 2, 3, 4, y 5 correspondiendo la categoría de riesgo 1 a la de menor riesgo de crédito y la categoría 5 a la de mayor riesgo de crédito.

**Artículo 7. Análisis de la capacidad de pago**

La entidad debe calificar la capacidad de pago de los deudores clasificados en el segmento Empresarial 1 o en el segmento Empresarial 2, con base en las metodologías aprobadas por el Órgano de Dirección o autoridad equivalente. Estas metodologías deben ser consonantes con sus políticas crediticias y congruentes con el tipo de deudor de que se trate, las líneas de negocio y productos crediticios. Las metodologías deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos:

a) Situación financiera, ingreso neto y flujos de efectivo esperados: Análisis de la fortaleza financiera y de la estabilidad y continuidad de las fuentes principales de ingresos. La efectividad del análisis depende de la calidad y oportunidad de la información.

b) Antecedentes del deudor y del negocio: Análisis de la experiencia en el giro del negocio y la calidad de la administración.

c) Situación del entorno sectorial: Análisis de las principales variables del sector que afectan la capacidad de pago del deudor.

d) Vulnerabilidad a cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio: Análisis, bajo escenarios de estrés, de la capacidad del deudor para enfrentar cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio.

e) Otros factores: Análisis de otros factores que pueden incidir sobre la capacidad de pago del deudor. Los aspectos que pueden evaluarse son, entre otros, los ambientales, tecnológicos, patentes y permisos de explotación, representación de productos o casas extranjeras, relación con clientes y proveedores significativos, contratos de venta, riesgos legales y riesgo país (este último en el caso de deudores domiciliados en el extranjero).

En el caso de las operaciones clasificadas en los segmentos indicados en los incisos del a) al d), y el inciso g) Empresarial 3, del Artículo 5 de este Reglamento, las metodologías que aplique la entidad para la calificación de la capacidad de pago del deudor, tanto en la etapa de otorgamiento del crédito como en las etapas de seguimiento y control, pueden apoyarse en análisis estadísticos a partir de portafolios crediticios, determinados por la propia entidad financiera con base en características comunes entre los deudores que sean de utilidad para establecer esquemas de calificación de capacidad de pago. La calificación de la capacidad de pago del deudor debe establecerse bajo escenarios de estrés, con base en las metodologías aprobadas por el Órgano de Dirección o autoridad equivalente.

Cuando el deudor cuente con una calificación de riesgo de una agencia calificadora, ésta debe considerarse como un elemento adicional en la evaluación de la capacidad de pago del deudor. Para el uso de las calificaciones rige lo dispuesto al respecto en el Artículo 13 de este Reglamento.

**Artículo 8. Clasificación de la capacidad de pago**

La entidad debe clasificar la capacidad de pago los deudores en los segmentos Empresarial 1 y Empresarial 2 en los siguientes niveles:

a) Nivel 1: tiene capacidad de pago,

b) Nivel 2: presenta debilidades leves en la capacidad de pago,

c) Nivel 3: presenta debilidades graves en la capacidad de pago, y

d) Nivel 4: no tiene capacidad de pago.

En los Lineamientos Generales a este Reglamento se definen aspectos mínimos que debe analizar la entidad en sus evaluaciones de la capacidad de pago de estos deudores.

**Artículo 9. Análisis del comportamiento de pago histórico**

La entidad debe evaluar el comportamiento de pago histórico del deudor con base en el nivel de comportamiento de pago histórico asignado al deudor por el Centro de Información Crediticia de la SUGEF.

**Artículo 10. Clasificación del comportamiento de pago histórico**

La entidad debe clasificar el comportamiento de pago histórico en los siguientes niveles:

a) Nivel 1: el comportamiento de pago histórico es bueno,

b) Nivel 2: el comportamiento de pago histórico es aceptable, y

c) Nivel 3: el comportamiento de pago histórico es deficiente.

En todo caso el nivel asignado por la entidad no puede ser un nivel de riesgo menor al nivel de comportamiento de pago histórico asignado al deudor por el Centro de Información Crediticia de la SUGEF.

En los Lineamientos Generales a este Reglamento se detalla la metodología para calcular el nivel de comportamiento de pago histórico de los deudores utilizada por el Centro de Información Crediticia de la SUGEF.

**Artículo 11. Calificación de riesgo**

La entidad debe calificar los créditos clasificados en los segmentos indicados en los incisos del a) al d), y el inciso g) Empresarial 3, del Artículo 5 de este Reglamento de acuerdo con los parámetros de: morosidad de la operación, determinada al cierre del mes en curso y el nivel de comportamiento de pago histórico del deudor.

En el caso de los deudores clasificados en los segmentos indicados en el inciso e) Empresarial 1 y en el inciso f) Empresarial 2 del Artículo 5 de este Reglamento, la entidad debe calificar los deudores de acuerdo con los parámetros de: morosidad máxima del deudor en la entidad al cierre del mes en curso, el nivel de comportamiento de pago histórico del deudor y el nivel de capacidad de pago.

Lo anterior, según los siguientes cuadros:

a) Segmento de créditos revolutivos de consumo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **CATEGORÍAS** | **MOROSIDAD DE LA OPERACIÓN** | **CPH** |
| **Etapa 1** | **1** | Al día. | Nivel 1 |
| **2** | Menor o igual a 30 días. | Nivel 1 o Nivel 2  |
| **Etapa 2** | **3** | Mayor a 30 días y menor o igual a 60 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **Etapa 3** | **4** | Mayor a 60 días y menor o igual a 120 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **5** | No se clasifica en las categorías anteriores.  |

b) Segmentos de créditos para vehículos y de créditos de consumo regular:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **CATEGORÍAS** | **MOROSIDAD DE LA OPERACIÓN** | **CPH** |
| **Etapa 1** | **1** | Al día. | Nivel 1 |
| **2** | Menor o igual a 30 días. | Nivel 1 o Nivel 2  |
| **Etapa 2** | **3** | Mayor a 30 días y menor o igual a 90 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **Etapa 3** | **4** | Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **5** | No se clasifica en las categorías anteriores.  |

c) Segmento de créditos para vivienda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **CATEGORÍAS** | **MOROSIDAD DE LA OPERACIÓN** | **CPH** |
| **Etapa 1** | **1** | Al día. | Nivel 1 |
| **2** | Menor o igual a 30 días. | Nivel 1 o Nivel 2  |
| **Etapa 2** | **3** | Mayor a 30 días y menor o igual a 120 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **Etapa 3** | **4** | Mayor a 120 días y menor o igual a 240 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **5** | No se clasifica en las categorías anteriores  |

d) Segmento Empresarial 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **CATEGORÍAS** | **MOROSIDAD DE LA OPERACIÓN** | **CPH** |
| **Etapa 1** | **1** | Al día. | Nivel 1 |
| **2** | Menor o igual a 30 días. | Nivel 1 o Nivel 2  |
| **Etapa 2** | **3** | Mayor a 30 días y menor o igual a 90 día**s.** | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **Etapa 3** | **4** | Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **5** | No se clasifica en las categorías anteriores.  |

e) Segmentos Empresarial 1 y Empresarial 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **CATEGORÍAS** | **MOROSIDAD MÁXIMA DEL DEUDOR** | **CPH** | **CAPACIDAD DE PAGO** |
| **Etapa 1** | **1** | Al día. | Nivel 1 | Nivel 1 |
| **2** | Menor o igual a 30 días. | Nivel 1 o Nivel 2  | Nivel 1 o Nivel 2 |
| **Etapa 2** | **3** | Mayor a 30 días y menor o igual a 90 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 |
| **Etapa 3** | **4** | Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días. | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 | Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4 |
| **5** | No se clasifica en las categorías anteriores. |

Las cinco categorías de riesgo señaladas en los cuadros anteriores se asocian con las siguientes tres etapas de clasificación consistentes con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 “Instrumentos Financieros”:

**a. Etapa 1:** Operaciones en riesgo normal, en esta fase no existe evidencia de incremento significativo de riesgo desde el reconocimiento inicial de la operación. Incluye la categoría 1 y la categoría 2.

**b. Etapa 2:** Operaciones en vigilancia especial, se observa incremento significativo de riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de la operación. Incluye la categoría 3.

**c. Etapa 3:** Operaciones de dudosa recuperación. En esta etapa se clasifican las operaciones de crédito que presentan evidencia de deterioro, como operaciones morosas o para las que existe una alta probabilidad de incumplimiento de pago. Incluye la categoría 4 y la categoría 5.

Para la constitución de estimaciones en este Reglamento, las operaciones en Etapa 3 se consideran en incumplimiento.

**Artículo 12. Calificación directa en categoría de riesgo 5**

La entidad debe calificar en categoría de riesgo 5 las siguientes operaciones:

**a.** Las operaciones con saldos sobre los que se haya exigido judicialmente su reembolso mediante la ejecución de la garantía, aunque estén garantizados, así como las operaciones sobre las que el deudor haya suscitado litigio de cuya resolución dependa su cobro.

**b.** Las operaciones en las que se haya iniciado el proceso de ejecución de la garantía real, incluyendo las operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad haya decidido rescindir el contrato para recuperar la posesión del bien.

**c.** Las operaciones de los titulares que estén declarados o se constate que se van a declarar en concurso de acreedores sin petición de liquidación.

**d.** Las garantías concedidas o avalados declarados en concurso de acreedores para los que conste que se haya declarado o se vaya a declarar la fase de liquidación, o sufran un deterioro notorio e irrecuperable de su solvencia, aun cuando el beneficiario del aval no haya reclamado su pago.

Las operaciones a que hace referencia este artículo se consideran en incumplimiento para el cómputo de estimaciones de este Reglamento.

**Artículo 13. Uso de calificaciones**

Para efectos de este Reglamento se aceptan las calificaciones públicas de riesgo emitidas bajo criterio internacional por Standard & Poors, Moody's y Fitch (Ver Anexo 2), y las calificaciones de las agencias calificadoras costarricenses autorizadas por la SUGEVAL, las cuales deberán encontrarse dentro de su periodo de vigencia. En el caso de los títulos valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica se debe utilizar la calificación soberana de Costa Rica por tipo de moneda. Las calificaciones de las agencias calificadoras autorizadas por la SUGEVAL deben ser homologadas a las calificaciones de las agencias internacionales según la metodología que se define en los Lineamientos Generales.

Debe utilizarse la calificación de largo plazo para todas las operaciones crediticias. Cuando el garante solo cuente con una calificación de corto plazo, ésta solo puede utilizarse para las operaciones crediticias cuya fecha de vencimiento esté dentro del plazo que abarca la calificación de corto plazo. Cuando existan dos calificaciones de dos agencias calificadoras, se aplicará la de mayor riesgo. Cuando existan más de dos calificaciones de diferentes agencias calificadoras, se considerará la segunda de mayor riesgo. En caso de que la emisión tenga una calificación de riesgo propia, debe usarse esta calificación y no la del emisor.

**CAPÍTULO III**

**ESTIMACIONES**

**SECCIÓN I**

**ESTIMACIONES**

**Artículo 14. Estimación para deudores no generadores de divisas**

La entidad debe mantener registrado al cierre de cada mes, un monto de estimación que como mínimo será igual al 1.50% del saldo total adeudado de las operaciones crediticias denominadas en moneda extranjera colocados en deudores no generadores de divisas. Las estimaciones indicadas en este artículo serán adicionales a las estimaciones específicas y contracíclicas.

Mediante Lineamientos Generales a este Reglamento, se establece la definición de deudores no generadores de divisas.

**Artículo 15. Tasa de Incumplimiento**

La entidad debe calcular el monto de la estimación específica de cada operación crediticia, multiplicando la exposición en caso de incumplimiento (EADR) regulatoria calculada según el Artículo 16 de este Reglamento, por la pérdida en caso de incumplimiento (LGDR) regulatoria calculada según el Artículo 20 de este Reglamento y por la tasa de incumplimiento (TI) regulatoria, por segmento y categoría de riesgo. indicada en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGMENTO** | **CATEGORÍA 1** | **CATEGORÍA 2** | **CATEGORÍA 3** | **CATEGORÍA 4** | **CATEGORÍA 5** |
| **Créditos revolutivos de consumo** | 2% | 15% | 50% | 70% | 100% |
| **Préstamos de consumo**  | 1% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |
| **Préstamos vehiculares** | 0.5% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |
| **Créditos de vivienda** | 1% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |
| **Créditos Empresarial 1** | 0.5% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |
| **Créditos Empresarial 2** | 1% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |
| **Créditos Empresarial 3** | 1% | 7.5% | 25% | 70% | 100% |

En el caso de créditos garantizados mediante avales, se aplica el tratamiento dispuesto en el Artículo 21 de este Reglamento.

La Superintendencia mediante Resolución razonada podrá variar las tasas de incumplimiento con la periodicidad que considere prudencialmente conveniente.

**SECCIÓN II**

**EXPOSICIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO**

**Artículo 16. Exposición en caso de incumplimiento**

La exposición en caso de incumplimiento para créditos directos será igual al saldo total adeudado de la operación, el cual consiste en la suma de saldo de principal directo, intereses, otros productos y cuentas por cobrar asociados a una operación crediticia directa.

La exposición en caso de incumplimiento para créditos contingentes será igual al resultado de multiplicar el saldo de principal contingente por el factor de equivalencia de crédito, y sumar otros productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia contingente.

**Artículo 17. Equivalente de crédito**

Las siguientes operaciones crediticias contingentes deben convertirse en equivalente de crédito según el riesgo crediticio que representan. El equivalente de crédito se obtiene mediante la multiplicación del saldo de principal contingente por el factor de equivalencia de crédito según los siguientes incisos:

**a)** Garantías de participación y cartas de crédito de exportación sin depósito previo: 0.05;

**b)** Las demás garantías y avales sin depósito previo: 0.25;

**c)** Líneas de crédito para tarjetas de crédito: 0.10;

**d)** Otras líneas de crédito de utilización automática: 0.50

La parte del saldo de principal contingente cubierto con depósito previo tendrá un factor de equivalencia de 0.00.

Las restantes operaciones crediticias contingentes sujetas a estimación por riesgo de crédito tendrán un factor de equivalencia de 1.00.

Mediante Anexo 1 de este Reglamento se incluyen las referencias contables de las operaciones crediticias contingentes, sujetas a estimación por riesgo de crédito.

**SECCIÓN III**

**PÉRDIDA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO**

**Artículo 18. Garantías**

Las garantías que deben considerarse para el cálculo de las estimaciones son los siguientes:

**a) Hipotecas sobre terrenos y/o edificaciones en primer grado.**

**b) Cédula hipotecaria constituida sobre bienes inmuebles en primer grado.**

**c) Prenda sobre maquinaria y equipo.**

**d) Prenda o pignoración sobre bienes muebles, excepto instrumentos financieros, e hipoteca sobre maquinaria fijada permanentemente al terreno.**

**e) Garantías mobiliarias, de conformidad con lo dispuesto en la “Ley de Garantías Mobiliarias”, Ley 9246.**

**f) Depósitos o instrumentos financieros que respaldan operaciones *back to back*.**

**g) Instrumento de deuda debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada o emitido por el Banco Central de Costa Rica o el Gobierno de Costa Rica.**

**h) Instrumento de deuda emitido por una entidad supervisada por la SUGEF sin calificación pública otorgada por una agencia calificadora.**

**i) Instrumento de capital debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada.** Las acciones deben estar inscritas en una bolsa de valores autorizada, donde se valoren diariamente y que la entidad o empresa emisora no forme parte del grupo o conglomerado financiero de la entidad acreedora.

**j) Instrumentos de capital no inscritos en una bolsa de valores**. Las acciones deben contar con una valoración realizada por un tercero independiente, la valoración debe actualizarse al menos cada 90 días, y debe tenerse a disposición los estados financieros auditados de la persona jurídica emisora correspondientes al ejercicio económico más reciente. No se incluye el instrumento de capital emitido por entidades o empresas que integran el grupo o conglomerado financiero de la entidad acreedora.

**k) Participación en un fondo de inversión abierto debidamente inscrito en la plaza correspondiente.** Los fondos de inversión abiertos deben estar inscritos, contar con grado de inversión y no integrar el grupo o conglomerado financiero del deudor.

**l) Participación en un fondo de inversión cerrado debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada**. Los fondos de inversión cerrados deben estar inscritos, contar con grado de inversión y no integrar el grupo o conglomerado financiero del deudor.

**m) Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad**. Las facturas del Sector Público con vencimiento no mayor a los 6 meses con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad.

**n) Fideicomiso de garantía.** De acuerdo con la naturaleza del bien según los incisos anteriores, menos los gravámenes de mayor prelación que no están a favor del fideicomiso.

**o) Aval o fianza solidaria emitidos por una institución del sector público costarricense.**

**p) Factura emitida por una persona jurídica del sector privado con respectiva cesión con recurso a favor de la entidad**.

**q) Cartas de crédito *stand-by* emitida por un intermediario financiero**. La carta de crédito *stand-by* debe ser irrevocable, incondicional, de pago inmediato y no puede haber sido emitida por una entidad integrante del grupo vinculado a la entidad que concede el crédito.

**r) Avales otorgados por el Fondo de Avales y Garantías del Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) y por el Fondo de Garantías del Fondo especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME).** La aceptación de estos avales y garantías como mitigadores de riesgo de crédito está sujeto al cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas en la Nota 1 del apartado 7.2, de la Sección 7 del Anexo 3 “Metodología Estándar” del “*Reglamento sobre gestión y evaluación del Riesgo de Crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo*”, Acuerdo SUGEF 15-16.:

La garantía que respalda más de una operación crediticia debe considerarse según el porcentaje de responsabilidad establecido en el contrato de crédito para el cálculo del valor ajustado de la garantía correspondiente a cada operación crediticia.

En el caso de no estar establecido el porcentaje de responsabilidad, la cobertura de la garantía se calcula en forma proporcional a los saldos totales adeudados de las operaciones crediticias garantizadas. Para los efectos de este cálculo, el saldo total adeudado de las operaciones contingentes debe multiplicarse por el respectivo factor de equivalencia de crédito.

**Artículo 19. Monto mitigador de la garantía**

El valor monto mitigador de las garantías se determinará según la siguiente metodología:

**a)** En el caso de colaterales reales, tales como bienes muebles o inmuebles, el valor ajustado de la garantía debe calcularse utilizando la siguiente fórmula:

**Monto mitigador de garantías= Valor inicial x (1 – factor x ln** **(tiempo)) x Porcentaje de recuperación.**

**Donde:**

**Valor inicial:** El último valor de tasación o valorización del colateral.

**Factor:** El factor de descuento que modifica el valor del colateral por los años transcurridos desde la última valorización o tasación.

**ln:** Logaritmo natural.

**Tiempo:** Tiempo medido en años, entre la fecha de la última valorización o tasación disponible, y la fecha de corte del cálculo de las estimaciones crediticias.

**Porcentaje de recuperación:** Porcentaje respecto del último valor de tasación consignado.

En la fórmula previa se debe de utilizar el porcentaje de recuperación y factor de descuento según tipo de colateral, de acuerdo con el siguiente cuadro:

**b)** En el caso de colaterales financieros y otros derechos de cobro, el monto mitigador de la garantía debe calcularse utilizando la siguiente fórmula:

**Monto mitigador de la garantía= Valor inicial x (1 – RC)**

**Donde:**

**Valor inicial:** Es el valor de mercado del instrumento financiero o el valor nominal en el caso de otros derechos de cobro.

**RC:** porcentaje de ajuste respecto del valor inicial del colateral

En la fórmula previa se debe de utilizar el RC según tipo de colateral, de acuerdo con el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COLATERAL FINANCIERO** | **FACTOR ÚNICO** | **CATEGORÍA 3 O MEJOR****(AAA A BBB-)** | **CATEGORÍA 4****(BB+ A BB-)** | **CATEGORÍA 5****(B+ A B-)** | **CATEGORÍA 6****(CCC O PEOR)** |
| **Efectivo.** **Depósito en la misma entidad.** | **0%** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Instrumento de deuda. (Inscrito)** | **-** | **15%** | **20%** | **25%** | **100%** |
| **Instrumento de deuda** **(GOCR, BCCR)** | **-** | **15%** | **20%** | **25%** | **100%** |
| **Instrumento de deuda. (Entidad supervisada por la SUGEF sin calificación pública otorgada por una agencia calificadora)** | **30%** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Instrumento de capital debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada.** | **-** | **30%** | **40%** | **50%** | **100%** |
| **Participación en un fondo de inversión abierto debidamente inscrito en la plaza correspondiente.** | **-** | **30%** | **40%** | **50%** | **100%** |
| **Participación en un fondo de inversión cerrado debidamente inscrito en una bolsa de valores autorizada.** | **-** | **30%** | **40%** | **50%** | **100%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **COLATERAL** | **FACTOR ÚNICO** |
| **Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad** | 40% |
| **Instrumento de capital no inscrito en una bolsa de valores** | 50% |

**Notas:**

**a)** El Factor de Ajuste de 40% se aplica de manera alternativa ante la ausencia de calificaciones de riesgo de agencias calificadoras.

En el caso del colateral “*Factura con su respectiva cesión con recurso a favor de la entidad*” tienen un porcentaje de ajuste del 40%.

**Artículo 20. LGD regulatoria para cálculo de estimaciones**

La perdida en caso de incumplimiento a ser utilizada en el cálculo de las estimaciones específicas se determinará según la siguiente metodología:

**a)** En el caso de colaterales reales, tales como bienes muebles o inmuebles la LGD regulatoria se calcula utilizando siguiente fórmula:

**LGD promedio = max {(EADR – Monto mitigador garantías) / EADR, 0}**

**LGDR = LGD min + (1 – LGD min) x LGD promedio**

**Donde:**

**LGD min:** Valor mínimo de LGD de 10%.

**LGD promedio:** Valor del EAD porcentual que se pierde luego del incumplimiento 0 y 1.

**LGD regulatoria (LGDR):** perdida en caso de incumplimiento a ser utilizada en el cálculo de las estimaciones específicas.

**EAD**R**:** Exposición en caso de incumplimiento, regulatoria.

**b)** En el caso de colaterales financieros y otros derechos de cobro, la LGD regulatoria se calcula utilizando siguiente fórmula:

**LGD prom = max {(EADR – Monto mitigador garantías) / EADR, 0}**

**LGDR = LGD min + (1 – LGD min) x LGD promedio**

**Donde:**

**LGD min:** Valor mínimo de LGD de 5%.

**LGD promedio:** Valor del EAD porcentual que se pierde luego del incumplimiento 0 y 1.

**LGD regulatoria (LGDR):** perdida en caso de incumplimiento a ser utilizada en el cálculo de las estimaciones específicas.

**EADR:** Exposición en caso de incumplimiento, regulatoria.

El monto mitigador de garantías corresponde al calculado según el Artículo 19 de este Reglamento.

**Artículo 21: Tratamiento para avales**

El efecto mitigador de los avales se aplica según el enfoque de sustitución, donde la exposición en caso de incumplimiento se separa en dos partes. La parte de la exposición cubierta por el aval será tratada según el riesgo de crédito del avalista o proveedor de protección crediticia, y la parte descubierta de la exposición será tratada según el riesgo de la operación o del deudor.

a) En el caso de aval o fianza solidaria emitidos por una institución del sector público costarricense, se aplica la siguiente formula:

**EADA = [EADR – 80% x min {EADR, Monto Avalado}]+[80% x min {EADR, Monto Avalado}]**

**Donde:**

**EADA** = Exposición en caso de incumplimiento, considerando avales, segmentada en la parte descubierta y la parte cubierta.

**EADR:** Exposición en caso de incumplimiento, regulatoria.

Con el propósito de determinar el monto de la estimación, la parte descubierta de la exposición será multiplicada por la Tasa de Incumplimiento que corresponde al deudor o la operación, y la parte cubierta será multiplicada por 0.5%.

b) En el caso de avales otorgados por el Fondo de Avales y Garantías del FONADE y FODEMIPYME, se aplica la siguiente fórmula:

**EADA =** [**EADR – M x min {EADR, Monto Avalado}**]**+**[**M x min {EADR, Monto Avalado}**]

**Donde:**

**EADA** = Exposición en caso de incumplimiento, considerando avales, segmentada en la parte descubierta y la parte cubierta.

**EADR:** Exposición en caso de incumplimiento, regulatoria.

**M =** Porcentaje de mitigación que corresponda al porcentaje de cobertura de cada fondo, según se indica a continuación:

1) Cuando el porcentaje de cobertura es mayor o igual a 100%, se debe utilizar como máximo un porcentaje de mitigación del 100%.

2) Cuando el porcentaje de cobertura es menor a 100%, se utilizará como porcentaje de mitigación el porcentaje de cobertura.

El porcentaje de cobertura se obtiene de dividir el efectivo más el valor de las inversiones que respaldan los avales emitidos, entre el monto nominal total de avales emitidos.

Con el propósito de determinar el monto de la estimación, la parte descubierta de la exposición será multiplicada por la Tasa de Incumplimiento que corresponde al deudor o la operación, y la parte cubierta será multiplicada por el porcentaje de estimación mínimo establecido en la Nota 1 del apartado 7.2, de la Sección 7 del Anexo 3 “Metodología Estándar” del *“Reglamento sobre gestión y evaluación del Riesgo de Crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo”*, Acuerdo SUGEF 15-16.

**Artículo 22. Estimación contable**

Las entidades que utilicen la metodología estándar deben mantener registrado contablemente, con contrapartida en la cuenta de resultados, al cierre de cada mes en forma individualizada en sus libros, como mínimo, el monto de la estimación a que hace referencia el artículo 14 y el artículo 15 de este Reglamento.

Las entidades podrán registrar un monto por estimaciones superior al mínimo establecido utilizando la metodología estándar. En tales casos, la aplicación de porcentajes que correspondan a categorías de riesgo más altos implicará la reclasificación automática del deudor u operación a la categoría de riesgo asociada a la estimación reportada.

Para las entidades que utilicen metodologías internas basadas en pérdidas esperadas, pero no avaladas para la constitución de estimaciones por parte de la Superintendencia, aplican los siguientes criterios.

**a)** Si el monto de la estimación crediticia bajo la metodología interna es menor que la estimación calculada bajo la metodología estándar, la entidad deberá mantener registrado como mínimo el monto correspondiente a la metodología estándar y su registro será contra los resultados al cierre de cada mes.

**b)** Si el monto de las estimaciones resultantes de aplicar la metodología interna es mayor que el monto de las estimaciones calculadas bajo la metodología estándar, únicamente los importes derivados de la metodología estándar podrán registrarse con contrapartida en la cuenta de resultados al cierre de cada mes. Cualquier exceso determinado en estimaciones calculadas bajo la metodología interna, por encima de la metodología estándar, deberá registrarse contablemente utilizando como contrapartida una cuenta individualizada del patrimonio.

**SECCIÓN IV**

**DEUDORES CON OPERACIÓN ESPECIAL**

**Artículo 23: Clasificación por Operaciones Especiales**

La reclasificación automática de un deudor producto de la identificación de operaciones especiales se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) **Reclasificación a Categoría 3**: Cuando en el periodo de observación de los últimos 24 meses, en dos oportunidades, al menos una de las operaciones crediticias del deudor ha sido objeto de intervención por parte de la entidad financiera. Se entiende la intervención como la aprobación por parte de la entidad de cualquier modificación o conjunto de modificaciones en al menos una de las operaciones crediticias del deudor.

b) **Reclasificación a Categoría 4 o 5:** Cuando en el periodo de observación de los últimos 24 meses, en tres oportunidades, al menos una de las operaciones crediticias del deudor ha sido objeto de intervención por parte de la entidad financiera. Se entiende la intervención como la aprobación por parte de la entidad de cualquier modificación o conjunto de modificaciones en al menos una de las operaciones crediticias del deudor.

Se entiende como modificación, para los efectos de este Artículos, la prórroga, la readecuación o el refinanciamiento.

La categoría indicada no podrá mejorarse, hasta tanto se verifiquen las condiciones indicadas en el artículo siguiente. Sin embargo, la entidad deberá reclasificar al deudor con operación especial según corresponda, a categorías de mayor riesgo cuando se verifiquen los respectivos criterios de calificación establecidos en este Reglamento.

**Artículo 24: Criterio de salida de Categoría 3 por operaciones especiales**

Un deudor con operación especial podrá calificarse en categorías de menor riesgo cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

**a.** Cuando se verifique para el deudor con operación especial, que cumple con los criterios de clasificación correspondientes a las categorías de menor riesgo establecidos en este Reglamento.

**b.** El deudor haya demostrado con respecto al nuevo cronograma de pagos del crédito el pago puntual de al menos cuatro (4) cuotas consecutivas. Para este efecto se considerará como pago puntual el cumplimiento de la obligación en la fecha establecida en el contrato.

**Artículo 25. Liquidación de operaciones de crédito contra la estimación**

La entidad debe contar con políticas y procedimientos aprobados por su Órgano de Dirección para el caso en que requiera liquidar operaciones de crédito contra la estimación individual correspondiente.

Dichas políticas y procedimientos deben contemplar los casos en que las operaciones de crédito deban ser liquidadas por considerarse incobrables, luego de agotadas razonablemente, las gestiones administrativas o judiciales de cobro; se haya determinado la imposibilidad práctica de su recuperación; o su saldo total adeudado se encuentre estimado en un ciento por ciento.

La liquidación de una operación de crédito contra la estimación es un movimiento contable que consiste en la eliminación del activo con cargo a su respectiva estimación contable, y su consecuente traslado a una cuenta de orden. Dicha liquidación, de ninguna manera extingue el derecho de la entidad acreedora de continuar con el cobro de las sumas adeudadas, ni tampoco releva al responsable del crédito del cumplimiento de su obligación.

Para la liquidación de las operaciones crediticias contra su respectiva estimación, la entidad debe ajustarse a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Información Financiera y Anexos y documentar en el expediente de crédito de la operación, las gestiones y valoraciones efectuadas para sustentar la liquidación de la operación de crédito contra su estimación.

La entidad debe informar a la SUGEF el detalle de operaciones crediticias e instrumentos financieros liquidados en cada mes, así como el monto total de cuentas y productos por cobrar liquidados en cada mes. Se faculta al Superintendente General de Entidades Financieras, para que establezca la información, la periodicidad y los medios físicos o electrónicos que estime pertinentes, con que las entidades supervisadas deberán informar sobre la liquidación de operaciones crediticias, instrumentos financieros y cuentas y productos por cobrar.

**TITULO III.**

**METODOLOGÍAS INTERNAS**

**CAPÍTULO I**

**MODELOS INTERNOS**

**Artículo 26. Metodologías internas**

Las entidades podrán optar por constituir las estimaciones específicas por riesgo de crédito a que se refiere el Artículo 15 de este Reglamento utilizando metodologías internas, previa no objeción por parte de la SUGEF.

Las metodologías deben estar reflejadas en las políticas de crédito de la entidad y estar debidamente aprobadas por el Órgano de Dirección.

Las metodologías deben desarrollarse tomando en consideración el conocimiento de la entidad sobre el sujeto de crédito, el proyecto de negocio, el ciclo productivo y la naturaleza de las actividades productivas que se financian.

La entidad debe contar con procedimientos para validar sus metodologías. Toda metodología debe someterse a revisión para verificar su idoneidad frente a los riesgos crediticios que presentan las líneas de negocio mencionadas en el Artículo 5 de este Reglamento. Las metodologías deben ser evaluadas por un órgano de control interno y externo al menos una vez cada año por parte de alguno de ellos de forma tal que cada dos años se disponga de una evaluación por parte de ambos.

**Artículo 27. Requisitos para la solicitud de uso de metodologías internas**

La entidad podrá solicitar a la SUGEF el uso de metodologías internas para efectos de constitución de estimaciones, si satisface previamente lo siguiente:

a) Estar calificada como Normal de acuerdo con el reglamento de calificación correspondiente.

b) Mantener durante los últimos dos años un adecuado nivel de gestión integral de riesgos, en particular en la gestión de riesgo de crédito, lo anterior según lo establecido en el Acuerdo SUGEF 2-10.

c) Las metodologías deben estar basadas en NIIF 9.

d) Documento Técnico del respectivo modelo.

e) La metodología interna de riesgo de crédito presentada para admisión ha sido revisada y aprobada por el Órgano de Dirección.

f) La metodología interna está integrada a la gestión diaria del riesgo de crédito por al menos dos años consecutivos y forma parte de los procedimientos habituales de la institución financiera. Es decir, que sus resultados o componentes (PI y PDI; o cualesquier otro) según sea el método, hayan sido utilizado~~s~~ al menos en las etapas de otorgamiento, seguimiento y recuperación de las respectivas carteras, con fines tales como: admisión de créditos, fijación de precios, establecimiento de límites, priorización en el cobro, entre otros.

g) La diferencia en los montos de las estimaciones entre las metodologías internas y el método estándar, se encuentran debidamente justificadas por la entidad, en función de las características de su cartera de crédito.

h) El cumplimiento de los puntos establecidos en *Requerimientos para el uso de metodologías internas*, Anexo 3 de este Reglamento.

i) Validación de la metodología por parte de un órgano externo aceptado por la Sugef.

j) Presentar la propuesta de homologación de las categorías de riesgo de los modelos internos con las categorías de riesgo del modelo estándar.

**Artículo 28. Validación por parte de un órgano externo para el uso de metodologías internas**

Previo a que la Superintendencia admita el uso de una metodología interna para la constitución de estimaciones, en sustitución de la metodología estándar, la entidad debe contar con la validación de la metodología por parte de un Órgano Externo que certifique que cumple con lo indicado en el Anexo 3.

**Artículo 29. Resolución sobre uso de metodologías internas**

Una vez recibida la solicitud de la entidad para admitir el uso de metodologías internas, y valorados a satisfacción de la Superintendencia los requerimientos establecidos en los artículos 27 y 28 de este Reglamento, la Superintendencia deberá emitir alguna de las siguientes resoluciones:

**a) Resolución de no objeción**, en cuyo caso la entidad podrá registrar con contrapartida en la cuenta de resultados al cierre de cada mes, el monto de estimaciones calculado con la metodología interna, independientemente de si dicho monto excede o se encuentra por debajo del monto calculado con la metodología estándar. A partir de la fecha de inicio de la aplicación de la metodología interna para el cálculo de estimaciones, la entidad debe informar mensualmente a la Superintendencia tanto el monto de estimaciones calculado utilizando la metodología interna, como el monto de estimaciones resultante de aplicar la metodología estándar.

**b) Resolución de objeción**, en cuyo caso la entidad podrá solventar las debilidades indicadas por la Superintendencia, en el plazo que defina la misma entidad, y presentar nuevamente a la Superintendencia la solicitud para admitir el uso de metodologías internas. Una vez que la entidad ha corregido las debilidades indicas, deberán transcurrir 24 meses de prueba del modelo interno corregido para que éste sea utilizado para la constitución de estimaciones. La entidad debe continuar aplicando la metodología estándar, hasta que obtenga la Resolución de no objeción sobre el uso de metodologías internas.

**Artículo 30. Objeción posterior para el uso de metodologías internas**

En el caso de que la Superintendencia determine el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los Artículos 27 y 28 de este Reglamento, comunicará a la empresa o entidad financiera las debilidades detectadas, así como su objeción para el uso de metodologías internas. La empresa o entidad financiera deberá computar las estimaciones según la metodología estándar, para lo cual dispondrá de un plazo de hasta tres (3) meses contado a partir de la comunicación de la Superintendencia.

Se procederá de igual forma, si los resultados de las evaluaciones efectuadas por la auditoría interna o externa o de la misma Superintendencia, comprometen la confiabilidad de las metodologías internas y la suficiencia de los niveles de estimaciones.

La entidad podrá solventar las debilidades indicadas por la Superintendencia, en el plazo que defina la misma entidad, y presentar nuevamente a la Superintendencia la solicitud para admitir el uso de metodologías internas. Una vez que la entidad ha corregido las debilidades indicas, deberán transcurrir 12 meses de prueba del modelo interno corregido para que éste sea utilizado para la constitución de estimaciones. La entidad debe continuar aplicando la metodología estándar, hasta que obtenga la Resolución de no objeción sobre el uso de metodologías internas.

**Artículo 31. Recurso de revocatoria a la objeción para el uso de metodologías internas**

Contra la resolución que dicte la SUGEF respecto al inciso b) del Artículo 29, podrán interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

En caso de que la resolución de revocatoria de SUGEF esté sustentada en opinión de terceros e información aportada por la misma entidad, la entidad puede aportar opiniones de otro experto independiente.

**Artículo 32. Constitución de estimaciones en caso de objeción posterior para el uso de metodologías internas**

El tratamiento de las estimaciones constituidas, a partir de la comunicación de la Superintendencia a que se refiere el Artículo 30 de este Reglamento, será el siguiente:

a) En caso de que el monto de las estimaciones constituidas con la metodología interna sea mayor al monto de las estimaciones computadas con la metodología estándar, esas estimaciones no se reversan.

b) En caso de que el monto de las estimaciones constituidas con la metodología interna sea menor al monto de las estimaciones computadas con la metodología estándar, las entidades deberán proceder a la constitución de las provisiones que resulten de la aplicación de la metodología estándar en un plazo no mayor a doce (12) meses.

**Artículo 33. Recurso de revocatoria en caso de objeción posterior para el uso de metodologías internas**

Contra la resolución que dicte la SUGEF respecto al Artículo 30 de este Reglamento, podrán interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

Si la SUGEF admite el recurso con suspensión del acto, la entidad no aplicará el incremento en estimaciones, hasta que se resuelva el recurso a favor de la SUGEF.

Si la SUGEF admite el recurso sin suspensión del acto, la entidad debe aplicar el aumento en estimaciones, hasta que se resuelva el recurso.

**Artículo 34. Componentes para el cálculo de pérdidas esperadas**

Las metodologías deben contemplar desarrollos para al menos los siguientes componentes del cálculo de las pérdidas crediticias esperadas:

a) Probabilidad de incumplimiento,

b) Exposición en caso de incumplimiento, y

c) Pérdida en caso de incumplimiento.

Toda exposición de riesgo de crédito debe estar debidamente calificada.

**Artículo 35. Enfoque para realizar el cálculo de pérdidas esperadas y homologación de categorías de riesgo.**

El cálculo de las pérdidas esperadas debe realizarse con un enfoque que permita la comparación de los resultados con los de la segmentación descrita en el Artículo 5 de este Reglamento.

Para efectos de homologar las probabilidades de incumplimiento de los modelos no objetados con las calificaciones de riesgo del modelo estándar, las entidades deberán aplicar los intervalos que establecerá la Superintendencia mediante Resolución.

Esta homologación es necesaria para realizar los reportes al Centro de Información Crediticia, de endeudamiento de crédito y en las notas a los estados financieros.

**Artículo 36. Calificaciones internas de riesgo**

La entidad debe definir los indicadores de la capacidad de predicción de los modelos cuantitativos de calificación o puntuación; la precisión del cálculo de probabilidades de incumplimiento; la definición de umbrales y procedimientos para su modificación, en caso que éstos pierdan capacidad de predicción; y procedimientos para operar bajo un escenario de baja predicción de los modelos de calificación.

Es responsabilidad de la entidad disponer de los mecanismos, cuantitativos y cualitativos, para monitorear periódicamente si sus modelos tienen un nivel de predicción estadísticamente aceptable y razonable.

Como parte de su seguimiento de la cartera, la entidad debe generar informes sobre la evolución de la exposición agregada por calificación de riesgo, tendencia y análisis de la migración entre las calificaciones de riesgo y pérdidas esperadas por cada cartera relevante.

**Artículo 37. Tercerización de modelos internos**

La institución financiera que dependa de un proveedor externo para el desarrollo, validación o asignación de la clasificación interna de sus operaciones o deudores deberá asegurar el acceso a la información detallada del desarrollo y validación de los modelos a esta Superintendencia.

Además, deberá mantener un seguimiento activo de la capacidad de predicción de los modelos y políticas para la contratación de estos servicios.

**TITULO IV**

**DISPOSICIONES FINALES**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES FINALES**

**Artículo 38. Información de la SUGEF**

La información sobre los deudores que la SUGEF envía o pone a disposición de las entidades, bajo ninguna circunstancia implica calificación alguna sobre la solvencia y liquidez del deudor, por lo que la SUGEF no asume ninguna responsabilidad por operaciones crediticias otorgadas por las entidades con base en esta información.

**Artículo 39. Supervisión *in situ* de la cartera crediticia**

La supervisión *in situ* sobre el cumplimiento de este Reglamento inicia formalmente con la reunión de entrada. El Director General de Supervisión respectivo debe comunicar a la entidad por escrito al menos con cinco días hábiles de anticipación la integración del equipo de supervisión y los alcances de la supervisión, incluyendo principalmente, pero no limitado a: la lista inicial de deudores para analizar, y la metodología utilizada para la constitución de estimaciones. En esta reunión de entrada la entidad debe tener a disposición del equipo de supervisión los expedientes de crédito de la lista inicial de deudores, la documentación sobre la metodología utilizada para la constitución de estimaciones, y comunicar el nombre del responsable de atender los requerimientos de información solicitados por el coordinador del equipo de supervisión.

El coordinador del equipo puede requerir por escrito los expedientes de crédito de otros deudores no incluidos en la lista inicial en cualquier momento durante la supervisión in situ, para cuya entrega la entidad dispone como máximo de tres días hábiles.

El equipo de supervisión verifica la calificación del deudor y el cálculo de sus estimaciones con vista en la información que consta en el expediente de crédito aportado por la entidad. Si el expediente no está ordenado según lo establecido en los lineamientos generales, éste puede ser devuelto a la entidad para ser ordenado en un plazo máximo de dos días hábiles.

Una vez analizado el expediente, el coordinador del equipo de supervisión comunica por escrito a la entidad que cuenta con dos días hábiles para completar la información que se le requiera y adicionar la información que la entidad estime pertinente. La información adicionada al expediente de crédito una vez transcurrido este plazo no se considera para la calificación del deudor, el análisis de las garantías y el cálculo de las estimaciones correspondientes.

Los deudores cuyo expediente de crédito no fue entregado en el plazo establecido y según lo requerido se recalifican en la categoría de riesgo 5.

La supervisión in situ finaliza con la reunión de salida. Con al menos dos días de anticipación, el coordinador del equipo debe convocar por escrito a la reunión para explicar y entregar al gerente general de la entidad los resultados preliminares de la supervisión in situ de la cartera crediticia, los cuales incluyen al menos un listado de los deudores recalificados, las garantías cuyo valor ajustado fue modificado y las estimaciones recalculadas, con su debida justificación, todo en forma abreviada.

La Superintendencia respectiva debe comunicar a la entidad el informe final de la supervisión in situ de la cartera crediticia a más tardar 20 días hábiles después de la reunión de salida. Este plazo puede ser prorrogado excepcionalmente por 10 días hábiles adicionales en casos calificados. La Superintendencia respectiva debe comunicar los motivos de la prórroga a la entidad previamente al vencimiento del plazo de 20 días hábiles.

El informe final debe indicar los motivos por los cuales la Superintendencia respectiva considera que deben ajustarse las categorías de riesgo a los deudores, el valor de las garantías y el cálculo de las estimaciones. El Superintendente respectivo puede delegar en el correspondiente Director General de Supervisión la comunicación oficial del informe final. Contra dicha resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, Ley 6227, dentro del plazo de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del acto. El recurso de revocatoria lo resuelve el Superintendente y el de apelación el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

**Artículo 40. Peticiones improcedentes**

Los recursos de revocatoria y apelación deben ser rechazados de plano cuando se presenten peticiones improcedentes, conforme con lo establecido en el Artículo 292, numeral 3, de la Ley General de la Administración Pública. Para efectos de este Reglamento, se entienden como peticiones improcedentes los reclamos de las entidades basados en documentación o información aportada con posterioridad al vencimiento del plazo de dos días indicado en el Artículo anterior, párrafo cuarto.

**Artículo 41. Sanciones**

La negativa a proporcionar información sobre las operaciones crediticias, el impedimento u obstaculización de inspección o supervisión de sus operaciones, la alteración de registros contables, el envío o presentación de información falsa o incompleta son sancionados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558.

**Artículo 42. Incumplimiento en el envío de información**

Para las entidades financieras fiscalizadas por este reglamento que en un determinado periodo no remitan la totalidad de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA o que remitan la información fuera del plazo de entrega predefinido, por razones no atribuibles a fallas en los equipos informáticos de las Superintendencias, el monto de la estimación por deterioro e incobrabilidad de la cartera de crédito y la estimación por incobrabilidad de créditos contingentes debe calcularse de la siguiente manera:

1. Determinar para el último mes de envío completo de la información, el porcentaje que representa el monto de la estimación mínima respecto de la cartera de crédito sujeta a estimación de ese mismo mes.

2. El monto de las estimaciones a registrar contablemente debe ser igual o mayor al monto que resulta de multiplicar: el porcentaje determinado en el punto 1. anterior por el saldo en el mes de no envío de información de las cuentas indicadas en el Anexo 1 “Operaciones Crediticias sujetas a estimación”, aplicándose el equivalente de crédito que corresponda a las cuentas contingentes, más la cuenta 148.03. A este saldo resultante de esta multiplicación se suma el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cartera correspondiente a la categoría 1 del último mes de envío completo de la información por un 0.25% y por cada mes consecutivo de no envío de información debe adicionarse un 0.25% acumulativo mensualmente. En el momento en que la entidad cumple con el envío exitoso de la totalidad de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA, se deja de aplicar la acumulación del 0.25% mensual. En el siguiente mes, cuando se cumpla con lo indicado en el numeral 4. de este Artículo, la entidad puede reversar el monto de las estimaciones adicionales originadas en la aplicación de este Artículo, y que excedan el monto de la estimación mínima en ese momento. En caso de un nuevo incumplimiento, inicia nuevamente con el 0.25% mensual acumulativo.

3. El Manual de Información del Sistema Financiero establece que la entidad debe remitir la información financiero contable en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del último día de cada mes. La entidad debe prever si contará oportunamente con la totalidad de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA, que le permita cumplir con la fecha límite de envío. En el caso de que la entidad prevea algún incumplimiento en la remisión de dicha información, debe registrar las estimaciones que corresponda según los numerales 1. y 2. anteriores, y remitir la información financiero contable en el plazo establecido.

4. En el siguiente mes, la entidad puede reversar el monto de las estimaciones originadas en la aplicación de este Artículo siempre que cumpla con el envío en el mes en curso de la totalidad de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA correspondiente del mes de no envío de la información y siempre que la entidad no prevea algún incumplimiento en el envío de dicha información para el mes en curso.”

En caso de fallas técnicas atribuibles a las Superintendencias, éstas deben comunicar los medios a través de los cuales se debe remitir la información.

**Artículo 43. Envío de Información**

En el caso de entidades financieras supervisadas por la SUGEF, la información de los XML de las clases de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA deben ser remitidos a más tardar el noveno, décimo y undécimo día hábil de acuerdo al grupo asignado por la SUGEF para cada una de las entidades supervisadas, según los contenidos, formatos y medios que defina la SUGEF en el Manual de Información del Sistema Financiero.

En el caso de las entidades autorizadas a realizar actividades crediticias, supervisadas por SUGESE y SUPEN, el Superintendente mediante lineamientos definirá el plazo y el medio para la remisión de la información crediticia que aplique, de acuerdo a las características de sus supervisados.

**Artículo 44. Derogatorias**

Se deroga el “*Reglamento para la calificación de deudores*”, Acuerdo SUGEF 1-05, aprobado mediante artículo 7 del acta de Sesión 540-2005 del 24 de noviembre de 2005.

**Transitorios**

**Transitorio I**

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 17. Equivalente de crédito, de este reglamento, se aplicará la siguiente gradualidad:

|  |  |
| --- | --- |
| **Año** | **Porcentaje** |
| **2024** | 2.0% |
| **2025** | 4.0% |
| **2026** | 6.0% |
| **2027** | 8.0% |
| **2028** | 10.0% |

**Transitorio II**

En el periodo de la transición a la adopción de la metodología estándar a la que hace referencia este Reglamento, la entidad debe remitir a la SUGEF informes trimestrales de impacto con el objetivo de anticipar eventuales afectaciones en estabilidad, solvencia o irregularidad financiera. Los informes estarán referidos a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022 y 2023.

Los informes deben incluir, como mínimo, la siguiente información:

a) El monto mínimo de estimación según el Acuerdo SUGEF 1-05.

b) El monto mínimo de estimaciones según este Reglamento (Metodología Estándar).

c) El monto registrado contablemente de estimaciones.

d) El monto de utilidades retenidas disponible para la constitución de reservas patrimoniales.

Las entidades deben utilizar, al menos, la segmentación establecida en este Reglamento.

**Transitorio III**

Si como resultado de los informes a que hace referencia el Transitorio II se determina una afectación en estabilidad, solvencia o irregularidad financiera, la Superintendencia solicitará a la entidad un Plan de Acción que será ejecutado durante en el periodo entre 2022 y 2023.

**Transitorio IV**

A partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta de este Reglamento, en cualquier momento las empresas o entidades supervisadas por SUGESE, SUPEN y SUGEF, deben comunicar a su respectivo supervisor su interés en iniciar el proceso para obtener la no objeción para el uso de metodologías internas para el cálculo de estimaciones, en sustitución de la metodología estándar, a que hace referencia este Reglamento.

Una vez que la empresa o entidad comunica a su respectivo supervisor su interés en iniciar el proceso para obtener la no objeción para el uso de metodologías internas, debe incluir adicionalmente en el informe trimestral al que hace referencia el Transitorio II, lo siguiente:

a) El monto mínimo de estimación calculado según el modelo interno.

b) La segmentación utilizada en el modelo interno.

Las empresas o entidades supervisadas podrán solicitar el aval para el uso de esas metodologías internas para la constitución de estimaciones, en sustitución de la metodología estándar, cuando cumplan con lo establecido en los Artículos 27 y 28 de este Reglamento.

**Transitorio V**

Si a partir de los resultados a que hace referencia el Transitorio II, se determina que el monto mínimo de estimaciones según la metodología estándar de este Reglamento es mayor al monto registrado contablemente según el Acuerdo SUGEF 1-05, las entidades deben incrementar gradualmente las estimaciones durante el 2022 y 2023 tal que alcanzan el monto mínimo requerido según la metodología estándar de este Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Si al 1 de enero de 2024, las entidades aún no han alcanzado ese monto mínimo, disponen de hasta doce (12) meses para completar el monto mínimo requerido por la metodología estándar.

**Transitorio VI**

Si a partir de los resultados a que hace referencia el Transitorio II, se determina que el monto mínimo de estimaciones según la metodología estándar de este Reglamento es menor al monto registrado contablemente según el Acuerdo SUGEF 1-05, no se reversan las estimaciones en exceso.

**Transitorio VII**

Los saldos correspondientes a la estimación específica registrados en las cuentas 139.01, 139.10, y 139.M.01 al 31 de diciembre de 2023, deben mantenerse en esas mismas cuentas a partir del 1 de enero de 2024, es decir no se reversan.

Además, los saldos correspondientes a la estimación genérica registrados en las cuentas 139.02.M.01, 139.02.M.04 y 139.52.M.02 al 31 de diciembre de 2023, no se reversan y deben reclasificarse en las cuentas correspondientes a la estimación específica a partir del 1 de enero de 2024.

Finalmente, los saldos correspondientes a la estimación contracíclica registrados en las cuentas 139.02.M.04 y 139.52.M.03, al 31 de diciembre de 2023, no se reversan y se mantienen en esas mismas cuentas a partir del 1 de enero de 2024.

**Transitorio VIII**

Los procesos administrativos iniciados en aplicación del Acuerdo SUGEF 1-05 “Reglamento para la Calificación de Deudores”, que se mantengan pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, continuarán hasta que sean resueltos.

**Anexo 1**

**Operaciones crediticias sujetas a estimación**

El principal de las operaciones crediticias se registra por su naturaleza en las siguientes cuentas o subcuentas, conforme la codificación del Anexo 1 de Reglamento de Información Financiera:

|  |  |
| --- | --- |
| 131  | Créditos vigentes  |
| 132  | Créditos vencidos  |
| 133  | Créditos en cobro judicial  |
| 134  | Créditos restringidos  |
| 611.01.M.02  | Avales saldo sin depósito previo  |
| 611.02.M.02  | Garantías de cumplimiento saldo sin depósito previo  |
| 611.03.M.02  | Garantías de participación saldo sin depósito previo  |
| 611.04.M.02  | Otras garantías sin depósito previo  |
| 612.02  | Cartas de crédito a la vista saldo sin depósito previo  |
| 612.04  | Cartas de crédito diferidas saldo sin depósito previo  |
| 613.01.M.02  | Cartas de crédito confirmadas no negociadas saldo sin depósito previo  |
| 615.01  | Líneas de crédito para sobregiros en cuenta corriente  |
| 615.03  | Líneas de crédito para factoraje  |
| 615.02  | Líneas de crédito para tarjetas de crédito |
| 615.99  | Otras líneas de crédito de utilización automática  |
| 617.01  | Otras contingencias crediticias  |

**Productos y cuentas por cobrar asociados a operaciones crediticias**

Los productos y cuentas por cobrar asociados a operaciones crediticias se registran por su naturaleza en las siguientes cuentas y subcuentas conforme la codificación del Anexo 1 de Reglamento de Información Financiera:

|  |  |
| --- | --- |
| 138  | Cuentas y productos por cobrar asociados a cartera de créditos  |
| 142.01  | Comisiones por cobrar por créditos contingentes  |

**Anexo 2**

Equivalencias de las calificaciones de las agencias calificadoras de riesgo internacionales

Calificaciones de largo plazo:



Calificaciones de largo plazo:



**Anexo 3**

**Requerimientos para el uso de metodologías internas**

Este Anexo describe los requerimientos mínimos que deberán tener las metodologías internas utilizadas por las instituciones financieras para la constitución de estimaciones por riesgo de crédito.

**1 Requerimientos Generales**

En esta sección se describen los requisitos generales, los cuales deben de considerar, al menos lo siguiente:

**1.1** Requerimientos de gobierno corporativo de las metodologías internas.

a) Las políticas correspondientes de los comités relacionados con las metodologías internas, sus integrantes y las actas.

b) Disponer de un manual de políticas en el que se describan los lineamientos sobre el desarrollo, validación, implementación, seguimiento e integración a la gestión de las metodologías internas.

c) Actas de las sesiones del Órgano de Dirección en las cuales consta la aprobación de las políticas y lineamientos mencionados en los puntos a) y b) anteriores.

**1.2** Descripción detallada de la estructura organizacional, de las actividades y responsabilidades del Órgano de Dirección, Alta Gerencia, Comités y unidades funcionales que se encuentran relacionadas con las metodologías internas, incluyendo la cantidad de integrantes involucrados.

**1.3** Descripción de las metodologías internas y los criterios utilizados para la segmentación. Incluir los montos de colocaciones, estimaciones, cantidad de deudores y riesgo, asociados a cada metodología y segmento, para los 2 años en que estas han estado integradas a la gestión.

**1.4** Documento que detalle la integración de las metodologías en la gestión de riesgo de crédito de la entidad, considerando los objetivos, alcance, funciones, métodos y componentes implementados.

**1.5** Un Informe anual Integral de Riesgos el cual deberá incluir una sección en la que se haga referencia a la Metodología Interna, al cumplimiento de los requerimientos establecidos en la regulación, los ajustes realizados a la misma. Esta sección forma parte integral de este informe.

**2 Requerimientos de las metodologías internas**

En esta sección se describen los requisitos mínimos que deben de tener las metodologías internas.

**2.1 Entorno tecnológico**

Las entidades deben contar con un documento que describa arquitectura tecnológica, sus sistemas fuentes (otorgamiento, gestión, seguimiento, etc.) y los procesos dedicados a extraer la información requerida desde dichos sistemas, junto con los controles asociados a este.

Asimismo, debe contarse con un informe de evaluación del entorno tecnológico, por parte de un área técnica independiente.

**2.2 Diseño de metodologías**

Las entidades deben contar con un documento técnico que describa en forma detallada, todo el proceso de confección de las metodologías, incluyendo el sustento de cada criterio, procedimiento y decisiones adoptadas. Dicho documento al menos debe contener la siguiente información según sea aplicable:

i. Período de Estudio: Definición de los períodos de observación y desempeño empleados para confeccionar la metodología interna. Las bases de datos deben de incluir como mínimo 10 años de información histórica.

ii. Segmentación: Descripción de las segmentaciones y subsegmentaciones efectuadas, incluyendo para cada período de estudio, la cantidad de casos de la población y/o muestra si esta última se ha realizado. En caso de emplear muestras, describir el método de muestreo empleado y el procedimiento de selección de estas.

iii. Definición de Incumplimiento: Incluir la cantidad de casos con y sin incumplimiento respecto del tamaño de la población y/o muestra para cada segmento.

iv. Variables empleadas: De acuerdo con el método que se utilice, detallar cada una de las variables consideradas (todas las que se probaron, inclusive las que finalmente fueron desechadas) en la metodología; los criterios utilizados para la elección de esas variables; su definición y nomenclatura; escala de medición; codificación y su estratificación; análisis descriptivo y exploratorio de datos realizado a dichas variables, sus resultados razonados y las acciones tomadas a partir de este análisis

v. Método directo de cálculo de porcentaje de PI: Para este tipo de metodología, además de los puntos antes descritos, se incluirá en forma detallada la totalidad de análisis efectuados que permitieron obtener la pérdida esperada bajo el primer método.

**2.3 Aplicación y seguimiento de metodologías**

Las entidades deben contar con los siguientes documentos que respaldan la metodología interna:

a) Manual en el que se detalle el procedimiento de cálculo y los criterios utilizados en la aplicación de la metodología interna.

b) Manual en que se detalle el procedimiento de cálculo de los procesos de seguimiento del desempeño de las metodologías internas, sus segmentaciones y componentes de riesgo; así como la suficiencia de estimaciones.

c) Informes de seguimiento para cada uno de los siguientes requerimientos, vigentes durante los dos años previos a la presentación de una solicitud, de las metodologías internas:

1. Los procesos de seguimiento del desempeño de cada una de las segmentaciones definidas, de los componentes y de los resultados de las metodologías internas, son confiables y robustos, lo que se sustenta mediante pruebas empíricas y estadísticas (estabilidad poblacional, indicadores de discriminación, entre otras).

2. Determinan que las estimaciones son suficientes, sustentadas en métodos de backtesting que permiten comparar las estimaciones obtenidas de las metodologías internas con información real, acorde a las segmentaciones y predicciones.

3. Existen informes periódicos hacia los encargados de la gestión de riesgo, a las áreas comerciales, a la Alta Gerencia y al Órgano de Dirección. Los informes dan cuenta al menos de las pruebas definidas en los literales i y ii precedentes, los resultados del test de uso y el impacto que resulta de aplicar para cada cartera o segmentación, los resultados de las metodologías internas y los componentes, según sea el método, frente a escenarios base y de tensión.

**2.4 Metodologías de otorgamiento**

En caso de que la entidad las emplee o incorpore el resultado de estas en las metodologías internas para efectos de la constitución de estimaciones, adjuntar documentación en que se describan en forma detallada, los aspectos señalados en los puntos 2.2 y 2.3 anteriores. Asimismo, en el caso que la entidad utilice la componente PI obtenida directamente de sus modelos de otorgamiento, dichos modelos consideran las etapas de desarrollo, seguimiento y validación.

**2.5 Bases de Datos**

Las entidades deben de disponer de bases de datos y diccionario de variables que contengan, para cada metodología la totalidad de información empleada, de manera que permita efectuar íntegramente la réplica de su construcción y funcionamiento. Estas bases de datos deben de tener las siguientes características.

a) Desarrollo de metodologías internas: Base de datos con el detalle a nivel de número de cédula y operación de: período de selección y seguimiento; muestra seleccionada; marca de incumplimiento; nombre de la metodología interna; segmento y subsegmento; productos; totalidad de las variables iniciales consideradas en el análisis (originales, construidas y transformadas) y los resultados de estas y puntajes y/o perfiles según corresponda. En el caso de metodologías basadas en PI y PDI, incluir además los coeficientes de las variables; resultados de las componentes; y cualquier otra información relevante empleada en la construcción.

b) Funcionamiento de metodologías internas: para el cierre de periodo previo al de la solicitud de evaluación de la metodología interna, base de datos que contenga: número de cédula de los deudores sujetos a provisión; nombre de la metodología interna; segmento; subsegmento (en caso que aplique); código de operación, código de producto; descripción del producto; puntaje de otorgamiento y seguimiento (todo lo anterior según el formato interno de la entidad); código de operación de acuerdo a los archivos respectivos del XML; nombre de producto (según formato XML); total de las variables involucradas en el proceso de determinación de las estimaciones y sus resultados (coeficientes, tasas, PI, PDI, PE, etc.).

c) Diccionario de variables para las bases de datos solicitadas en a) y b) anteriores, en el que se describa la nomenclatura de los campos, junto con la codificación y definición de cada una de sus categorías.

Las entidades deberán tener esas bases de datos a disposición de la Sugef, así como del ente que realice la verificación de las metodologías internas.

**3 Informes emitidos por la función de validación, que den cuenta de las revisiones efectuadas por ésta a las metodologías internas presentadas a evaluación.**

Las entidades deben de contar con áreas o funciones independientes y especializadas que permitan realizar las actividades de desarrollo, validación y seguimiento de las metodologías internas, asegurando una adecuada segregación funcional y de responsabilidades. Asimismo, mantener comités que velen por el cumplimiento de los lineamientos aprobados por el Órgano de Dirección, en todos los aspectos que conciernen a las metodologías. En términos específicos, deberá estar documentado el rol de las funciones, considerando aspectos como los siguientes:

i. La función de diseño y desarrollo está a cargo de confeccionar y recalibrar las metodologías internas. La subcontratación de servicios externos para esta etapa no exime a la institución financiera de la total responsabilidad por las metodologías confeccionadas. Será el Órgano de Dirección, en un acuerdo formal, quien deberá aprobar las definiciones de ámbito, perímetro y funciones, tanto de los prestadores de servicios como de la institución, asegurando la debida transferencia de conocimiento para una acabada comprensión de la estructura y funcionamiento de todos los aspectos técnicos que resulten de las prestaciones de servicios externalizadas.

ii. El ámbito de la función de seguimiento, como mínimo abarca las siguientes actividades: (a) Evaluación periódica, al menos trimestral, del desempeño de las metodologías internas y sus componentes. Esto implica a su vez el análisis detallado de las eventuales deficiencias que pudiesen presentar las metodologías internas, (b) Reportes periódicos de los resultados a las distintas instancias involucradas.

iii. La función de validación certifica la calidad de los datos, previo al desarrollo de las metodologías internas y en las etapas posteriores de implementación y seguimiento. Dicha certificación debe incluir al menos, para cada base de datos empleada, la existencia de un conjunto de procedimientos de control y de evaluación de la calidad de la información, conteniendo criterios y planes de acción para su rectificación en casos de deficiencias o ausencia de datos. Asimismo, es parte de sus responsabilidades, la certificación de las metodologías internas en las mencionadas etapas, velando por su confiabilidad, la observancia de lo dispuesto en este Reglamento.

**4 Informe sobre la integración de las metodologías internas en la gestión diaria de los riesgos (prueba de uso).**

Las metodologías internas para las que se solicita evaluación deben de estar integradas a la gestión diaria del riesgo de crédito (prueba de uso) por al menos dos años y forman parte de los procedimientos habituales de la institución. Es decir, que sus resultados o componentes (PI y PDI; o cualesquier otro) según sea el método, hayan sido utilizados al menos en las etapas de otorgamiento, seguimiento y cobro de las respectivas carteras, con fines tales como: aprobación de créditos, fijación de precios, establecimiento de límites, priorización en el cobro, entre otros.

Rige a partir del 1° de enero de 2024.”

Atentamente,

Jorge Monge Bonilla

***Secretario del Consejo***